

2. Hay salida

2.2

Comenzar de nuevo

Luis Pedro España N.

Luego del fallido intento de golpe de Estado los distintos sectores dirigentes del país se han visto en la necesidad de producir respuestas que logren atenuar la intranquilidad manifiesta que el alzamiento militar dejó sobre la democracia venezolana.

En un marco de desaciertos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y el gobierno, se han dado a la tarea de encontrar una "fórmula mágica" que les permita restablecer la estabilidad del orden sin incurrir en acciones, rectificaciones o aventuras reformistas, que puedan comprometer o afectar sus propios intereses o los derechos adquiridos logrados durante estos 34 años de democracia.

Así hemos visto cómo al día siguiente del frustrado golpe de Estado, el sector económico y sus voceros, trataron de advertir la absoluta independencia que existía entre el *programa de ajustes* y el levantamiento militar, sugiriendo que las causas del intento de desestabilización debían encontrarse exclusivamente en el ámbito de lo político. Por su parte, los representantes políticos, hacían lo propio reclamando del gobierno rectificaciones económicas y "cabezas de tecno-ministros", dado que habían sido los ajustes los responsables del contexto en que ocurre el intento de golpe militar y la posterior reacción civil.

Bajo una lógica maniquea, la segunda mitad del gobierno de Pérez se enfrenta en la necesidad de producir cambios (no esperados antes del Golpe), dada la amenaza cierta de no terminar su mandato o, más grave aún, que termine con él la continuidad democrática. Con la amenaza de la inestabilidad se exigen rectificaciones, pero no está nada claro en qué ámbitos, en cuál magnitud y con qué consecuencias mediatas e inmediatas en orden a la capacidad del país de producir riqueza, que ésta alcance a las mayorías y, además, en un marco de libertades políticas.

LA DEMOCRACIA QUE PROFESAMOS

Resulta absolutamente obvio sentenciar que un levantamiento militar (en nuestro caso frustrado) se debe a una crisis política de envergadura y que sus remedios se inscriben por tanto en la reestructuración de los principales elementos que constituyen el sistema político que vio comprometida su estabilidad. Partidos, titulares de cargos políticos, sistemas de representación y elección, entre otros, deben reacomodarse a la nueva situación, a menos que se arriesgen a que el "segundo golpe sea definitivo".

No obstante, pensar que la crisis de estabilidad que dejó el intento de golpe es en primer lugar una crisis política, y por tanto concluir que es en ese sector donde "exclusivamente" se deben producir cambios, ello no puede ser sino la visión parcial e interesada de un sector de la vida nacional que deliberadamente desconoce qué tipo de democracia es la venezolana.

Suponer que sólo a partir de reacomodos políticos, incluso sustantivos, es posible que se restablezca por sí misma la estabilidad y legitimidad perdida, refleja el desconocimiento del tipo de democracia que se formuló en Venezuela, o más probablemente, pretender cambiar el proyecto democrático que dio origen a nuestro sistema político.

En otras palabras, pretender que el sistema político, sus procesos, instituciones y agentes, cambien en dirección a obtener mayor credibilidad, lealtad u apoyo, sin tomar en cuenta la calidad de vida de la población, los niveles de desigualdad social, pobreza y deterioro reciente; implica no entender (o estar en desacuerdo) que esta democracia se instauró sobre la base de reivindicaciones políticas para los ciudadanos, pero también, y sin poder ser separada de lo anterior, de garantías de progreso y disfrute de los bienes modernizadores, por parte de todos los grupos sociales, que fuera obteniendo el país.

La democracia venezolana, fundada

en 1958, pretendió ser una democracia política, que dota de derechos y libertades a los ciudadanos, pero también ofrecía ser una democracia económica, que de ninguna manera alguno se desocupaba o dejaba fuera de sus responsabilidades *públicas* los problemas sociales.

Esta doble dimensión de la democracia venezolana no sólo se inscribió en el marco de lo normativo. La experiencia, por más de veinte años de régimen, fue que bajo el signo de la democracia era posible lograr mejoras relativas en los niveles de vida de la población. El reparto, aunque en ninguna forma equitativo, del ingreso petrolero por parte del Estado fungía como garante de la *promesa* de bienestar socio-económico, mientras que el sistema de representación y elección popular, con sus libertades colaterales, concretaban las reivindicaciones políticas ofrecidas por la democracia.

La asociación entre estas dos acepciones de democracia es tan cierta que incluso una llegó a ser subsidiaria de la otra. Así, mientras que objetivamente los principales actores del sistema político democrático aumentaban la distancia entre sus intereses y el de sus representados, cerraban los espacios y canales de participación, transformándose cada vez más en élites autocráticas; no fue sino hasta que los problemas económicos y sociales se hicieron presentes cuando quedó en evidencia el rezago de las reivindicaciones políticas prometidas, con el respectivo saldo negativo en los niveles de credibilidad, legitimidad y apoyo.

Aceptando que el proyecto vigente de democracia es aquel que reconoce y hace suyo la doble acepción que "la democracia" tiene en el país, y más importante aún, que sólo es ese perfil de sistema político el que los venezolanos estarían dispuestos a aceptar persuasivamente (*por las buenas*) y no coactivamente, como lo sería el caso de un régimen autoritario que nos lleve al sacrificio económico necesario. De ser así, llegamos a dos conclusiones lógicas:

1. Si sólo produciéndose cambios o rectificaciones es posible restablecer la estabilidad democrática; entonces éstas deben hacerse no sólo en el ámbito político, sino que también en el económico y social.
2. De prever que no pueden haber mayores transformaciones de tipo socio-económicas, o pretender *normativamente* que no las debe haber; los problemas de estabilidad democrática nos seguirán acompañando, o se está propugnando por un cambio político que necesariamente conducirá

a la *suspensión provisional* de las libertades políticas.

VIEJAS PROMESAS FRENTE A NUEVAS REALIDADES

Si lo que está planteado es rectificar en dirección a que las bases de sustentación de la democracia sigan teniendo vigencia, es decir, que políticamente se superen las involucionadas formas de representación, apareciendo nuevos canales de participación que se acoplen a los potenciales niveles de participación de la sociedad venezolana de hoy y, por otro lado, que socio-económicamente la expectativa de mejoría en las condiciones de vida vuelva a ser una posibilidad cierta; estas "*viejas promesas democráticas*" debe inscribirse en el marco de las nuevas realidades de país, para que sean viables.

Precisamente porque el país de hoy no es el de hace 34 años atrás, es por lo que las nuevas condiciones podrían comprometer a las antiguas bases de sustentación. No en vano pareciera que detrás de las resistencias al cambio por parte de la dirigencia política y la alarma de algunos sectores económicos porque se cuestione la reforma económica, se encuentra el proyecto latente de acoplar las actuales condiciones a la formulación de unas nuevas bases de sustentación democrática, en la cual "lo económico" se deslinde de "lo político" para hacerse privado, o al menos no tan ligados a compromisos políticos e incluso estatales.

El hecho que las condiciones iniciales que permitieron crear la sensación de respuesta por parte del sistema político en cuanto al desarrollo de una democracia, no sólo política sino incluso económica, no estén hoy presentes, si bien puede llevar a cambiar el proyecto político del cual nació la democracia, optar por la redefinición del proyecto podría llevar a suspender las libertades políticas, por los años que dure la superación privada de los problemas económicos.

De esta forma cualquier rectificación que se plantee el gobierno en este momento debería considerar reactivar las viejas promesas, aunque no así (necesariamente) la forma de cumplirlas. Suponer que sólo con reformas políticas se lograría el apoyo político suficiente para introducir los *ajustes* necesarios para hacer frente a las dificultades económicas, es tan irreal, como pretender que volviendo a la forma como operaba la economía venezolana en los años setenta se resolverán los problemas, incluso los políticos, y ello sin tocar al excluyente

sistema de partidos en el cual ha involucionado nuestra democracia.

Para el común de los venezolanos rectificar, responder positivamente a las consecuencias dejadas por el intento de golpe de Estado, no es más que reactivar las promesas sustentadoras originales de la democracia, si ello no es posible desde las nuevas realidades en las que se encuentra el país, el camino que sigue al 4 de febrero será la inestabilidad política hasta su definitivo quiebre.

ESPACIOS PARA MANIOBRAR

La variable determinante para tratar de verificar cuál es la probabilidad de que a partir de las nuevas condiciones se pueda seguir manteniendo el doble sentido de la democracia venezolana, está constituida por la respuesta a la pregunta de cual es el margen de maniobra que existe en los ámbitos políticos y económicos, para que se atiendan a las demandas, sin que ello comprometa la posibilidad de seguir atendiéndolas en el futuro. A simple vista parece que el espacio para las rectificaciones es mucho mayor en el campo de las reformas políticas, que del lado de las medidas o cambios económicos a realizar para que cese el severo ajuste que desde esta esfera se ha producido en los niveles de vida de la población.

Sin ánimos de estructurar un listado de rectificaciones, dentro del orden económico actual, sólo hay posibilidades de atenuar las dificultades sociales que se derivan (en parte) de los problemas económicos, siempre y cuando se re-legitime el papel del Estado en la atención e intervención eficaz en los asuntos sociales claves. Para lograr esto se debe aceptar que el Estado cada vez menos seguirá actuando como distribuidor de ingresos externos, para convertirse cada vez más en redistribuidor de los ingresos producidos internamente. Lejos de eliminarse sus cargas y responsabilidades sociales, éstas deben aumentar y para ello (entre otros) debe incrementarse la carga tributaria.

Para que esa re-legitimación ocurra, y sea posible que el tributo interno pueda compensar la pérdida de dinamismo del Estado en su acción social, éste debe redefinirse en términos no muy lejanos a lo que recurrentemente ha sido planteado en cuanto a la reforma del Estado. Incrementar sus niveles de eficiencia, seleccionar sus campos de intervención, liberarse de las ineficiencias clientelares partidistas y gremiales, producir políticas de Estado y no sólo de *gobiernos*, resolver la administración de justicia,

2. Hay salida

entre otras muchas reformas públicas; son algunos de los cambios que deben realizarse para "combatir" los preceptos ideológicos de su repliegue absoluto, o la ineficiente conformación del Estado a partir de los lineamientos de la llamada "Gran Venezuela".

Más que situar la discusión de las rectificaciones económicas en el estéril campo del *paquete*, que tal y como ha sido planteada lleva a la dicotomía *interesada* del "*quiebre de la economía vs. el quiebre o la minimización del Estado*", lo que se impone es obligar a que los agentes económicos se comporten como tales y asuman la responsabilidad social de "mantener" al Estado Democrático Social del futuro.

Si bien los espacios de maniobra o rectificación son algo estrechos en el área económica y parecen resumirse en buena parte a lo que el Estado pueda hacer para reformarse a sí mismo, a la recuperación de su potencial de intervención en el área social y a la posibilidad de que actúe soberanamente en materia impositiva, en el ámbito de lo político serían más los "puntos de agenda pendientes", aunque no por ello esté sea más fácil de llevar adelante que lo anterior.

Las rectificaciones políticas se refieren todas ellas a la posibilidad de iniciar y profundizar un proceso de modernización política, que se resume en la trillada frase de democratizar la democracia. Sin embargo, como la democratización no es más que la desagregación del poder, no se puede aspirar a que "voluntariamente" los centros de poder enquistados en los partidos y las organizaciones intermedias lo cedan, junto a los privilegios, para que éstos sean democratizados.

La disputa por la democratización del poder en Venezuela requiere al menos de dos contendientes en una relación de asimetría. En la actualidad sólo existen dos sujetos y ambos desde tipos distintos de poder tratan de homogeneizar sus intereses. Las élites económicas por un lado, y las élites partidistas, por otro, han dejado fuera del juego al único sujeto-objeto de la democratización en el país. Nos referimos al inexistente sujeto político que se expresa esporádicamente a través de "cacerolazos", a la mayoría que vota(ba), al expectante del 4 de febrero, al que busca el mesianismo salvador en Caldera, Uslar, Chávez, Piñerúa,

2. Hay salida

o cualquier otra figura pública por aparecer. Ese sujeto desarticulado, denominado indefinidamente como *Sociedad Civil*, sería el otro contendiente necesario que se encuentra en asimetría de poder político, y hasta que no surgan estos sujetos nuevos desde la inorgánica sociedad civil, la democratización de la democracia en Venezuela, seguirá en torno a las limitadas posibilidades de reforma de las devaluadas organizaciones e instituciones del sistema político actual.

HABLAR CLARO O MENTIR PARA GANAR TIEMPO

A partir de los márgenes de maniobra de que se dispone, bajo una estrategia para mantener el hilo constitucional en función de acoplar las bases sustentadoras de la democracia venezolana a las condiciones actuales del país en el orden económico y político, las posibles rectificaciones que estarían planteadas se inscriben todas ellas en el mediano o largo plazo. Recuperar la legitimidad del Estado para fortalecerse, ampliar su capacidad de intervenir eficientemente en el área social y comenzar a descentralizar el poder en aras de democratizar el sistema; son todos ellos tópicos que suponen la activación de múltiples procesos de largo plazo.

No obstante en los actuales momentos convocar a las distintas fuerzas sociales del país, plantearles la profunda rectificación que debe hacerse en términos de tiempo, con la finalidad de recuperar la estabilidad democrática, puede que no sea viable desde los actuales niveles de credibilidad y legitimidad con que cuenta este gobierno y el resto de los sectores que resultaron más afectados con el intento de golpe, es decir, todas las organizaciones de representación de intereses, y en especial los partidos políticos.

Si en la actualidad no hay legitimidad suficiente para obligar a que los empresarios paguen impuestos, a que los partidos se democratizen internamente, que los gremios entreguen a sus parcelas, que la prensa sea responsable y que se atenúen o pospongan las demandas imposible de satisfacer, lo que se impone es ganarle tiempo a los candidatos golpistas que pretende hacerlo por la fuerza y no por medio de negociacio-

nes.

De este momento hasta que por medios institucionales se abra un nuevo chance para realizar las rectificaciones de largo plazo que deben hacerse, el gobierno y el resto de los actores políticos comprometidos con esta democracia deben manejar acertadamente las expectativas de la población, ello significa centrar el discurso a lo que efectivamente podrá realizarse en los dos años que restan de mandato, activar todos los canales posibles de participación política para que no quede ningún actor político excluido, y no pretender creer que se puede engañar nuevamente con formulas macroeconómicas salvadoras o medidas de emergencia a una población descontenta e incrédula.

Al país se le debe hablar claro, tenemos problemas económicos y políticos para unos cuantos años más, nadie tiene la salida inmediata y definitiva, y cualquier solución fuera de la democracia no haría sino alargar nuestra larga lista de quejas fundadas. Hablarle claro al país supone no disparar expectativas que al no ser cumplidas degeneran en frustraciones susceptibles de ser recogidas por más de un oportunista político civil o militar. La tentación de prometer rectificaciones para que la población crea que se solucionarían los problemas y se atenderían las demandas, incluso las más particulares, no será sino nuevas razones para desconfiar de la democracia y sus cabezas visibles.

LA NECESIDAD DE VOLVER A EMPEZAR

Si aceptamos que la democracia venezolana sólo puede recuperarse si comienza a realizar las rectificaciones políticas y económicas de largo plazo que requiere, la pregunta es si el actual orden cuenta con ese tiempo o no. En principio habría que decir que sólo reactivando los apoyos mínimos necesarios se puede volver a empezar a tratar de enfrentar los problemas que estallaron desde finales de los años setenta.

En principio la cuenta de la continuidad se acorta o se alarga en la medida en que las élites (políticas, económicas y militares) se encuentran aliadas y están dispuestas a permanecer en esa condición o no. El apoyo o desapoyo popular sin organicidad, como el que se expresa en el país, bien poco cuenta. A lo más las manifestaciones de las masas dan información que será procesada en los cálculos que realizan las élites para permanecer dentro de la alianza o por el contrario traicionarla.

En plazos muy inmediatos la continuidad democrática depende de las élites. En el largo plazo, la posibilidad de seguir en democracia supone la reactivación de los apoyos en función del restablecimiento de las "promesas de la democracia". La forma de lograr el objetivo a largo plazo, requiere como condición necesaria que las actuales élites evalúen que les sigue resultando favorable mantener las libertades políticas y el hilo constitucional democrático, pero esto no es suficiente. La democratización del país y los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población en libertad política, requieren que el sistema político recupere su legitimidad y credibilidad.

Para que la población otorgue nuevamente legitimidad al sistema, se requiere empezar de nuevo. Supone renovar el contrato de ejercicio y delegación de las decisiones públicas entre representantes y representados. En ese sentido las iniciativas de la Constituyente, el adelanto de las elecciones presidenciales, o la aparición de posibles cambios en la bipolaridad AD - COPEI tras unos resultados electorales novedosos, pueden ser formulas "peligrosas" pero que podrían conducir al rescate de la legitimidad perdida y por tanto comenzar de nuevo a diseñar políticas de largo plazo.

Si bien es cierto, que el intento de golpe militar puso en entredicho las rectificaciones que se iniciaron en 1989, probablemente lo que necesitamos ahora, con el fin de sincerar definitivamente que es lo deseable y lo realizable en democracia, sea experimentar un golpe civil organizado, que estremezca institucionalmente a las élites y que a su vez reporte nuevas razones populares para volver a apoyar a la democracia.

En un escenario como este la continuidad en los sacrificios por hacer, la desactivación de poderes que llevan demasiado tiempo sin renovarse, la aparición de nuevos liderazgos y la posibilidad de independizar al poder político de compromisos que por recurrentes se han vuelto hereditarios; podría suponer soltar el lastre del pasado ensanchando así el margen de maniobra para las rectificaciones que deben hacerse.

Si esto no ocurre, el sistema político seguirá dependiendo en demasía del cálculo de las élites y ello es demasiado frágil para augurarle una feliz recuperación a nuestro debilitado sistema democrático.